

EL PROBLEMA DE LA HEGEMONÍA

CARLOS PEREYRA

I

Junto a las dos clases fundamentales de la sociedad capitalista existen varias otras clases y capas sociales subalternas cuya adhesión al proyecto histórico de una u otra clase fundamental determina su hegemonía respectiva. El núcleo básico de la hegemonía burguesa consiste en imponer la aceptación socialmente generalizada de un conjunto de creencias según las cuales el proyecto histórico construido con base en el principio de la propiedad privada constituye la mejor opción para el interés global de la sociedad y para los intereses particulares de los diferentes segmentos de la población. De manera alternativa, la hegemonía obrera se produce allí donde vastos sectores de la sociedad comparten el convencimiento de que el interés general de la nación, así como los intereses particulares de quienes carecen de propiedad e inclusive de pequeños y medianos propietarios, quedan mejor garantizados en la realización de un proyecto histórico fundado en la propiedad social de los medios de producción. Tal vez no hace falta señalar que la lucha por la hegemonía no se reduce a la confrontación escueta de esos dos principios (propiedad privada *vs.* propiedad colectiva), sino que alrededor de ambos se erigen complejos sistemas de valores, ideales y aspiraciones que se concretan en modalidades institucionales y mecanismos políticos de cuya conjugación derivan formaciones sociales profundamente diferenciadas.

El uso demasiado impreciso y laxo del concepto *hegemonía* termina por quitarle su significación propia y convierte al vocablo en una palabra más para designar la *dominación de clase*. Con ello no sólo se vuelve confuso el aparato teórico para el análisis de la realidad sino que, además, se abre paso a líneas de acción política que, precisamente por estar sustentadas en visiones falsas de la realidad, poseen alcance restringido y limitada capacidad de convocatoria. En efecto, debiera ser claro que no siempre y no en todas las sociedades hay un sistema hegemónico. Por el contrario, la proliferación de regímenes dictatoriales, por ejemplo, es indicador elocuente de que la hegemonía de

clase es más ocasional de lo que sugiere la utilización indiscriminada de ese concepto. No hay hegemonía de clase allí donde el orden social se mantiene por vías fundamentalmente represivas. La dominación de clase no es nunca, en sí misma, hegemonía de clase. En verdad, en los países del Tercer Mundo es muy difícil, prácticamente imposible, la construcción de hegemonía burguesa. Ello es así por varias razones principales: a) el capitalismo dependiente supone una transferencia de recursos sistemática a las metrópolis que dificulta una distribución del excedente capaz de hacer atractivo el sistema social para grandes sectores de la población; b) el capitalismo subordinado y tardío implica procesos prematuros de concentración de la propiedad que reducen también la posibilidad de que muchos miembros de la comunidad se identifiquen con las *bondades* de la propiedad privada; c) la Reforma Agraria ha sido altamente obstaculizada en estos países, por lo que en el campo suele predominar el latifundio en vez de la pequeña propiedad; d) en las condiciones del capitalismo dependiente las tareas de modernización de la planta productiva imponen un papel destacado al sector público, por lo que en un contexto de empresas paraestatales y nacionalizaciones la ideología de la propiedad privada enfrenta frecuentes descabros, y e) muchas veces hay notorias diferencias étnicas entre propietarios y no propietarios que, por supuesto, disminuyen las posibilidades de adhesión de éstos al proyecto histórico de aquéllos.

Ahora bien, el empleo del vocablo *hegemonía* no sólo es equívoco por la inclinación habitual a confundir dominación de clase y hegemonía de clase, sino también por la tendencia, aún más frecuente, a identificar *hegemonía social* y *hegemonía política*. En efecto, como resultado de la acentuada propensión en el pensamiento de izquierda a reducir lo político a lo social, suele pretenderse que la hegemonía política es siempre *expresión* de una hegemonía de clase. Vale la pena, sin embargo, no perder de vista la diferencia de niveles, aun si es indispensable, al mismo tiempo, ubicar las relaciones existentes entre ambos niveles. Es cierto que una organización política (hegemónica o no) está comprometida, en última instancia, ya sea con la conservación de la propiedad privada o con su abolición y, en este sentido, se adecua en mayor o menor medida al proyecto histórico de una u otra clase fundamental. Pero de ahí no se sigue que la organización política es la *representación* inmediata de la clase como tal. Si así fuera, un partido no podría nunca articular a sectores colocados en distintos lugares del espectro social o esa articulación sería consecuencia de un puro acto de engaño y manipulación ideológica. La experiencia histórica muestra, más bien, la capacidad de los partidos para ligarse a diferentes sectores de la sociedad, en la medida en que se presentan

como portadores de un proyecto nacional. Cuando hay hegemonía burguesa, los partidos con presencia real en la sociedad se ven obligados a operar dentro del campo de posibilidades abierto por esa hegemonía, aun si se trata de organismos ligados a los trabajadores (es el caso del Partido Laborista inglés, por ejemplo, o de la socialdemocracia alemana). Cuando no hay tal hegemonía de clase, bien se trata de regímenes dictatoriales o, en su defecto, se trata de sociedades donde hay hegemonía política de un partido que ha logrado erigirse en portador de lo nacional-popular.

II

En México no se ha construido hegemonía burguesa, no sólo por las razones antes mencionadas para todos los países dependientes, sino por las circunstancias particulares en las que se configuraron tanto las relaciones sociales como el Estado nacional y el poder político en nuestro país. En efecto, tejido social y mecanismos de gobierno quedaron aquí marcados con fuerza por la insurrección popular de la segunda década del siglo. La fórmula asentada en el Artículo 27 de la Constitución —“la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”— resume de modo vigoroso los obstáculos jurídicos, ideológicos y culturales que tendría la gestación de hegemonía burguesa en el desarrollo del México posrevolucionario. La creación de un extenso (aunque frágil) sistema ejidal que excluye la posibilidad de propiedad privada en buena parte de las tierras agrícolas, así como la sobrevivencia de formas indígenas de propiedad comunal; la presencia del Estado en la dirección del crecimiento económico; la formación de un poder político con apoyo de masas y obligado, por tanto, a la adopción de medidas —podría hablarse de *populismo institucional* al respecto— que de una u otra manera permitieran reproducir tal apoyo, son factores que entorpecieron el eventual surgimiento de hegemonía burguesa. En la cultura política del pueblo mexicano los valores asociados al agrarismo: nacionalizaciones, educación laica, antimperialismo, etcétera, tienen un peso que ha dificultado la aceptación socialmente generalizada del proyecto histórico de la burguesía.

Esas mismas circunstancias hicieron posible que el grupo político que emergió de la conmoción revolucionaria con el control del aparato estatal, figurara ante la sociedad como portador de un proyecto nacional y popular. Recabó, por tanto, la adhesión de vastos sectores

de la población que le confirieron sólida base de apoyo social. La hegemonía política de ese grupo, cuya actividad se institucionaliza más tarde en el PRI, es una realidad innegable durante un período prolongado. Si bien la corrupción y la ausencia de prácticas democráticas condicionaron muy pronto la aparición de brotes de descontento, sobre todo en sectores medios ilustrados, lo cierto es que fueron casi siempre manifestaciones muy localizadas. El momento de mayor peligro para esa hegemonía se presentó a finales de los años treinta, cuando adquiere mayor vigencia el componente nacional-popular de la acción gubernamental y la burguesía siente amenazado su proyecto histórico, por lo que algunos núcleos impulsan la formación del PAN. Sin embargo, el viraje iniciado en 1940 seguido de una etapa de auge y crecimiento sostenido, acabó por disolver aquel peligro; los nuevos y más numerosos sectores medios fortalecieron la base social de apoyo del régimen, quedando el partido del Estado sin oposición seria de derecha y de izquierda. Como era previsible, ese viraje conduciría en breve lapso al desgajamiento del PRI, pero cuando esto sucedió y se formó el Partido Popular (después PPS), se hizo evidente que el encuadramiento corporativo de los organismos sociales en el partido oficial permitiría reducir ese desgajamiento a su mínima expresión.

Se inicia un largo período en que la política gubernamental no puede escapar a las contradicciones que resultan de la pretensión de impulsar el desarrollo capitalista excluyente y, a la vez, mantener el carácter nacional-popular del Estado. En el campo se auspicia la formación de enclaves privilegiados de agricultura capitalista, a la que se destinan cuantiosos recursos en obras de infraestructura y, de manera paralela, se escatiman recursos para el sistema ejidal, al que se procura corromper y se sabotean sus modalidades de explotación colectiva; el reparto de tierras pasa a ser, con escasas excepciones, más un elemento de manipulación ideológica que instrumento de reforma agraria; miles de dotaciones firmadas en el papel son negadas en los hechos y las autoridades toleran —cuando no participan activamente— las respuestas violentas a las movilizaciones campesinas. La progresiva expansión del proletariado agrícola no encuentra en las organizaciones priístas interés alguno en fomentar su sindicalización y, por el contrario, se la bloquea inclusive mediante procedimientos ilegales. Tal es el caso, por ejemplo, de la negativa a registrar sindicatos de trabajadores agrícolas.

En el ámbito industrial, se busca la subordinación estricta de los organismos obreros y para ello se desata desde el gobierno una agresiva campaña orientada a eliminar todo vestigio de oposición. Los intentos de autonomía sindical son enfrentados con métodos represivos y se imponen castigos desmedidos (los once años de cárcel de Deme-

trio Vallejo, por ejemplo) a quienes pretenden imprimir otro sesgo a la vida sindical. No es muy diferente la experiencia de los colonos en diversas ciudades del país, pues los desalojos sin contemplaciones se suceden de manera prácticamente ininterrumpida. En cualquier caso, no obstante los rasgos despóticos —no tan excepcionales— en el trato de gobernantes y gobernados, ha sido el consenso más que la coerción lo que sustenta el sistema de gobierno en México. Si bien se desdibuja de modo creciente el carácter nacional-popular de la acción gubernamental, y los indicadores sobre distribución del ingreso bastan para demostrarlo, el país vivió una etapa prolongada de crecimiento y modernización que se tradujo en el mejoramiento general de las condiciones de vida.

Si cada vez era más difícil para el Estado legitimarse por su fidelidad al programa original de la Revolución, en cambio halló una fuente sustituta de legitimidad en los beneficios, desigualmente compartidos, del desarrollo capitalista. De 1940 a 1970 la sociedad mexicana experimenta acelerados procesos de urbanización e industrialización basados en un esquema económico que propició intensa formación de capital. La aprensión que en las clases propietarias suscitaba la conducta de los *gobiernos-emanados-de-la-revolución* cedió su lugar a la entusiasta colaboración con el grupo gobernante, que daba pruebas irrefutables de impulsar patrones de acumulación donde se privilegiaba la concentración del ingreso. El esquema posibilitaba también la rápida expansión de sectores medios con acceso a insospechados niveles de consumo e inclusive las clases trabajadoras, si bien no lograban modificar en su favor la participación del salario en la distribución de la riqueza al menos (sobre todo ciertos segmentos estratégicos) vivían mejor que antes. Por otra parte, mostraban continuado y sustancial incremento las cifras de población atendida en instituciones de salud y de niños y jóvenes que ingresaban a la enseñanza básica, media y superior. Quedaba siempre en las ciudades y en el campo un amplio sector de población marginada de los beneficios de ese desarrollo capitalista, pero ello no bastaba para poner en entredicho la hegemonía política del partido que conduce la gestión de la cosa pública.

En ese período no podían faltar, es obvio, conflictos nacidos de la virtual parálisis de la Reforma Agraria, así como ocasionales tensiones provocadas en el medio laboral por la insuficiencia de los salarios. En cualquier caso, la matriz principal de los antagonismos sociales se encontraba en la falta de democracia. Desde el comienzo, el proyecto original del Estado posrevolucionario concedió cierta atención a lo nacional-popular, pero desestimó casi por completo el componente democrático. La ausencia de este componente se hacía más notoria en la medida que la sociedad se modernizaba y volvía más compleja.

En 1968 se muestra en forma dramática la rigidez del sistema político mexicano y la necesidad de introducir cambios en sus modos de funcionamiento. Pero, además, empezaban a perfilarse síntomas de agotamiento del patrón de acumulación sostenido durante tres decenios. La extracción de recursos del campo desembocó en la crisis agrícola: la industrialización —basada en la sustitución de importaciones y en la capacidad de compra de capas con ingresos altos y medianos— comenzó a perder dinamismo; el déficit de las finanzas públicas y del sector externo imprimió alarmante velocidad al endeudamiento en el exterior. También eran indispensables transformaciones serias de la estructura económica.

III

En los años setenta, pues, el gobierno se ve obligado a abandonar el tono triunfalista de la retórica tradicional. Se emprende una tímida *apertura democrática* para sanear las relaciones políticas en el país, la cual se mostrará por completo insuficiente cuando las elecciones de 1976 se realizan con candidato único. Se busca sustituir la política económica anterior, conocida con el membrete de *desarrollo estabilizador*, pero no se logra armar una política alternativa coherente. El sexenio transcurre en medio de conflictos constantes entre el grupo gobernante y los sectores empresariales, debidos en parte a la agresividad del discurso oficial y, sobre todo, a los intentos de reanimar el languideciente agrarismo priísta, promover una reforma fiscal y recuperar el vigor de la economía por la vía de la inversión pública. Las inconsecuencias de la política gubernamental y la recesión del sistema capitalista internacional se combinan para acentuar las dificultades del sector externo, liquidar la estabilidad de precios que el país había sostenido casi 20 años y, al final del sexenio, termina también la estabilidad de la paridad cambiaria, cuando se volvió insostenible la sobrevaluación del peso y éste fue devaluado por primera vez desde 1954. El gobierno procuró evitar que la incipiente escalada inflacionaria afectara los salarios reales y ello acrecentó el antagonismo de la iniciativa privada.

El sexenio iniciado en 1976 heredó una situación económica crítica, un ambiente social enrarecido por descabellados rumores que tenían origen en grupos de la clase dominante y encontraban preocupante eco en los sectores medios de la población. La ideología empresarial había logrado importantes triunfos al conseguir que la opinión

pública identificara en el *populismo* gubernamental y en la corrupción de los funcionarios las causas últimas de los problemas que vivía el país. Tales triunfos fueron aún más relevantes en virtud de que el nuevo gobierno hizo suyas ambas tesis. En el terreno político se dio un gran paso en la ruta de la democratización con la promulgación de la LOPPE, pero se abandonaron los esfuerzos (con excepción del programa llamado *Sistema Alimentario Mexicano*) para reorientar la economía, aprovechando que el agotamiento del patrón de acumulación quedó provisionalmente oculto por el *boom* petrolero. Un torrente de divisas (petrodólares), inusitado para las dimensiones de la economía mexicana, entró al país y, paradójicamente, el ritmo del endeudamiento externo fue más acelerado que nunca. Presiones inflacionarias más fuertes, conjugadas con el empeño en mantener la paridad del peso no obstante su sobrevaluación, absoluta libertad cambiaria y eliminación de barreras arancelarias, crearon enormes boquetes por donde las divisas se fugaban con la misma rapidez que llegaban: consumo suntuario, incremento exponencial de los egresos turísticos, compra de bienes raíces en el exterior, ahorro depositado fuera de nuestras fronteras, etcétera.

Por otra parte, debido a la desintegración de la planta industrial del país, el atropellado crecimiento de la explotación petrolera y la expansión en otros renglones de la producción, descansó en un alto contenido de importaciones, por lo que la multiplicación de los petrodólares no logró cerrar la brecha del déficit comercial y éste, por el contrario, se amplió. Además, el capitalismo internacional se encontraba de nuevo en fase depresiva, por lo que disminuyeron los precios de materias primas que el país vende y, sobre todo, la política monetaria de Washington impuso tasas de interés jamás vistas, por lo que el servicio de la deuda se comió parte significativa de las divisas. Demasiado tarde, cuando el país había ya perdido miles de millones de dólares, el gobierno abandonó el dogma del libre cambio y estableció su control. El comportamiento tramposo de los banqueros (préstamos a empresas propiedad de la banca con tasas de interés por debajo del costo del dinero, voraces diferenciales en la compra-venta de moneda, participación decidida en la fuga de capital) y su alarmante capacidad para impulsar la concentración monopólica de la propiedad, crearon las condiciones para la nacionalización de la banca. El entusiasmo popular ante esta medida, sin embargo, se vio afectado porque ocurrió en un contexto de grave deterioro en las condiciones de vida de la población trabajadora, pues a diferencia del gobierno de Luis Echeverría, en el sexenio anterior la inflación fue acompañada de estrictas barreras salariales que redujeron los ingresos reales.

IV

Así pues, los años ochenta arrancan con el mayor desafío que la hegemonía política priísta ha enfrentado desde la consolidación del Estado posrevolucionario. Hay un brusco movimiento de precios —de magnitudes desconocidas para la abrumadora mayoría de los mexicanos— y en 1982 la inflación se acercó a los tres dígitos (98.8 por ciento). El crecimiento del producto interno bruto se ve suspendido de golpe y por primera vez en mucho tiempo hay una contracción de la economía (0.2%) que, combinada con el crecimiento de la población, arroja una disminución del producto per cápita superior al 2%. El endeudamiento del sector público en el exterior, sumado al rápido crecimiento de la deuda privada, llevan la deuda externa a 85 mil millones de dólares, creando graves dificultades no ya para la amortización de esa deuda sino inclusive para cumplir con el servicio de la misma. Los ingresos de los trabajadores experimentan recortes agudos y enormes sectores de la población que fueron beneficiados de manera muy insuficiente durante el período de crecimiento sufren, en cambio, rápido empobrecimiento. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional imponen severas restricciones al gasto público, lo que anula el esfuerzo gubernamental anterior en servicios sociales: se cancela el programa de COPLAMAR y se destinan menos recursos a educación y salud.

El desafío no se advierte en toda su intensidad con la simple consideración de las cifras agregadas de la evolución económica. Es preciso examinar la relación del grupo gobernante con cada uno de los sectores que conforman la sociedad, para comprender hasta qué grado la hegemonía política priísta está en crisis. Las clases propietarias, que ya habían reaccionado contra ciertos proyectos reformistas durante el gobierno de Luis Echeverría y fundaron a mediados de los años setenta el Consejo Coordinador Empresarial para vigorizar su presencia en la lucha ideológica y política, vieron en la nacionalización de la banca la prueba definitiva de que el *Estado de la Revolución mexicana*, con los requerimientos que derivan de su necesidad de mantener el apoyo de masas, constituye un peligro siempre latente para la conservación de sus privilegios. Con base en la experiencia anterior, según la cual cinco años de política proempresarial del gobierno de José López Portillo, orientada a restablecer lazos de complementariedad debilitados en el período de Luis Echeverría, condujeron, sin embargo, al golpe más severo que la burguesía ha padecido en la historia del país, esas clases propietarias no están ya dispuestas a respetar sus acuerdos básicos con el PRI.

Es cierto que la devolución del 34% de las acciones de la banca, medida adoptada por el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid en el primer mes de su gestión y, al parecer, las negociaciones sobre la indemnización a los banqueros, el destino de las acciones en otras empresas que tenía la banca, así como de las instituciones financieras restantes (aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, etcétera), frenaron el furor inicial de las clases propietarias que se expresó, sobre todo, en las varias reuniones convocadas con el lema *México en la libertad*. No obstante el esfuerzo del gobierno actual por colocarse otra vez en la línea de conducta admisible para las clases propietarias, será difícil recomponer niveles de confianza profunda. Hay signos suficientes para afirmar que los empresarios buscarán mayor participación política por medio del PAN. No se trata de sugerir que en el futuro inmediato habrá franca hostilidad de las clases propietarias hacia el grupo gobernante, pero sí de adelantar la hipótesis de que la burguesía no cejará en sus presiones hasta lograr cambios decisivos en el funcionamiento del aparato estatal que impidan sorpresas como la del 1 de septiembre de 1982.

En los sectores medios la credibilidad gubernamental se hundió con celeridad. Se sintieron despojados cuando sus ahorros nominados en dólares fueron convertidos en pesos, perdieron la capacidad de viajar al extranjero y de comprar productos importados. Buena parte de esos sectores tienen ingresos fijos y también resienten pérdida de capacidad adquisitiva. Con mayor angustia que otros segmentos de la población viven el sentimiento, señalado por Canetti, de que con la inflación disminuye el hombre mismo. Despolitizados y sin visión clara de lo que ocurre en la estructura económica del país atribuyen sus males y los de la sociedad entera a una causa única: la corrupción de los funcionarios públicos. El incremento de la delincuencia acarreado por la crisis estimula su preocupación por la seguridad personal y exagera su irritación contra quienes debieran ser responsables del orden social. Proclives a creer aun los más extravagantes rumores, su comprensión de las cosas está marcada por los parámetros de la televisión comercial.

No sólo es cada vez más difícil para el PRI mantener su hegemonía política sobre la burguesía y los sectores medios. Ocurre otro tanto con obreros, campesinos, burócratas y colonos. Si bien todavía los resultados electorales de 1982 y la capacidad de movilización que exhibe en sus actos el partido oficial, obligan a cautas evaluaciones del deterioro de su hegemonía en el ámbito popular, lo cierto es que no puede subestimarse ese deterioro. El empequeñecimiento de los salarios reales se prolonga desde hace varios años. Las maniobras para inhibir formas autónomas del sindicalismo se suceden sin interrup-

ción: no se concede registro a ciertos sindicatos, se desconocen directivas democráticamente electas, se toleran despidos de personal como represalia política, se recurre a la violencia para conservar el orden laboral, se respalda a líderes repudiados por sus bases, etcétera. Inclusive las relaciones del grupo gobernante y el sindicalismo priísta adquirieron tonos rípidos. Todo parece indicar que está llegando a su fin una etapa en la historia del sindicalismo mexicano, caracterizada por la relación especial de burocracia gobernante y burocracia sindical. El contenido latente de los pronunciamientos oficiales contra el populismo tiene este significado: la economía nacional no ofrece ya condiciones para propiciar la relación privilegiada del gobierno con la dirección de los organismos de masas que forman parte sustancial de su apoyo social. La imposibilidad de conciliar la política económica y los fines propios del movimiento obrero, cualquiera que sea su grado de mediatización, va acompañada de ciertas tendencias en el grupo gobernante, no inéditas por cierto, en las que prevalece el propósito de recortar la cuota de poder político del sindicalismo y la intención de desplazarlo a posiciones menos decisivas. No se trata, por supuesto, de que el gobierno y la dirección sindical estén dispuestos a cancelar el pacto social que los ha mantenido estrechamente unidos, pero —más allá de la tradicional vocación de alianza— existen hoy contradicciones objetivas que no pueden pasar inadvertidas.

La masa campesina, cuya adhesión al partido del Estado posibilita en buena medida la reproducción del poder priísta, hace ya largo tiempo fue desahuciada por la política gubernamental: no sólo el reparto agrario quedó reducido a esporádicos gestos, sino que, inclusive se le arrebató la expectativa de ulteriores dotaciones de tierra; los precios reales de los productos agrícolas se hundieron en un tobogán descendente y la oferta de trabajo se mantiene muy por debajo de las necesidades efectivas. No es extraño, pues, que la CNC, como las otras agrupaciones campesinas encuadradas en el partido oficial, se muestren cada vez más incapaces para canalizar la demanda popular e, inclusive, pierden con rapidez su carácter de organismos gestores en trámites de rutina. Algo semejante ocurre en el ámbito de los precaristas. El PRI había tenido parte significativa de su clientela urbana en el control de los movimientos de colonos decididos a conquistar un espacio en las ciudades y los servicios correspondientes. También aquí, sin embargo, se advierte una tendencia progresiva a la separación del partido oficial y las acciones reivindicatorias. Se gesta, pues, una crisis de hegemonía priísta por sus dificultades crecientes para articular la movilización social; ésta, por otra parte, comienza a manifestarse en sectores —como los empleados públicos— tradicionalmente dóciles.

Si se acentúa, como parece probable, la tendencia a la pérdida de

hegemonía por parte del PRI habrá consecuencias de muy variada índole. Por un lado, la derecha política, sobre todo el PAN, acrecentará su fuerza electoral como ya empieza a ocurrir. Las circunstancias impulsarán, por otra parte, el desarrollo de corrientes políticas en las que el radicalismo izquierdista, aun sin ofrecer una perspectiva seria de articulación social, cobrará mayor vigor. La tentación gubernamental a utilizar métodos represivos tendrá en ese contexto más aliento. Nada de ello elimina la posibilidad, si bien la vuelve más difícil, de avanzar en la construcción de una fuerza social y política capaz de estructurar una alternativa nacional, popular y democrática que sienta las bases para el reordenamiento del tejido social mexicano.